

## I

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que se acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Sentado lo anterior, la consulta plantea el análisis del proyecto normativo de la Orden Ministerial de referencia la cual tiene por objeto la aplicación a la Dirección General de Tributos de la normativa aplicable a la Agencia Tributaria en las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de aplicación de los tributos que sean competencia de dicha Dirección General salvo que exista normativa específica aplicable a dichas actuaciones, así como la promoción de la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios en los procedimientos y actividades de su competencia, mediante el establecimiento de un modelo normalizado de consultas y un documento normalizado de representación de carácter no obligatorio que facilitará en su sede electrónica asociada a todos los ciudadanos y empresas.

El señalado proyecto se estructura en dos artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. No tiene impacto presupuestario, de género, ni en la infancia y adolescencia.

Dado su reconocimiento como un derecho fundamental, los datos personales (que son en realidad cualquier dato o información de una persona física identificada o identificable) no pueden utilizarse sin más, sino que deben respetarse unas reglas sobre su utilización, las cuales indican cuándo y cómo pueden ser tratados. En este contexto las principales normas reguladoras del derecho fundamental a la privacidad de los datos personales son, en síntesis, las siguientes:

1. Reglamento general de protección de DP UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo, 27 de abril de 2016.
2. Directiva 2016/680, relativa al tratamiento para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales.
3. Ley Orgánica 3/1018, de 5 de diciembre, de protección de DP y garantías de los derechos digitales, y que sustituye a la anterior LOPDCP de 1999, por la que se adapta el marco español al Reglamento europeo y se desarrollan algunos de sus aspectos.
4. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Las citadas normas establecen el marco normativo básico en materia de protección de datos que luego se podrá concretar en cada sector específico, dentro siempre del marco de referencia establecido por la normativa europea reguladora de este derecho fundamental.

El proyecto normativo objeto de esta consulta en lo relativo al régimen jurídico de datos personales proyecta su regulación en la disposición adicional única, sobre tratamiento de datos personales, que a continuación se transcribe (el subrayado es nuestro):

*“1. Los datos personales aportados por los obligados tributarios en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones tributarias en las actuaciones a que se refiere esta orden serán tratados con la finalidad de la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos que corresponden a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, siendo responsable del tratamiento de dichos datos dicha Dirección. Este tratamiento se ajustará al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como a la normativa tributaria que resulte de aplicación. En la Sede electrónica de la Dirección General de Tributos se facilitará la información relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los derechos sobre los mismos a que se refiere el artículo 13 del citado Reglamento.*

*2. El tratamiento de datos se efectúa en virtud de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.*

3. Las categorías de destinatarios a quienes se comunicarán los datos serán, en su caso, las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

4. Las categorías de los interesados serán los obligados tributarios a que se refiere el apartado 1.

5. Respecto a las categorías de datos personales, se realizará el tratamiento sobre datos de carácter identificativo y datos de carácter tributario exigidos por la normativa vigente y aportados por el propio consultante para la tramitación de los procedimientos a que se refiere el apartado 1, conforme con el principio de proporcionalidad.

6. Las medidas de seguridad implantadas para la protección de estos datos se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del Ministerio de Hacienda”.

## II

Entrando al examen de su contenido se hace notar, en primer lugar, el carácter tributario que con carácter general van a tener los datos aquí tratados, lo que impone la obligación de tener en cuenta la normativa especial propia de este ámbito. Dicho lo cual, procedemos a analizar en detalle cada uno de los apartados de la citada disposición adicional única; la cual, en su primer apartado detalla la finalidad del tratamiento de los datos recogidos en los formularios que se aprueban a través de ella la cual consistirá en *la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos que corresponden a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda*. A este respecto hacemos dos precisiones. La primera consiste en enfatizar la importancia de los fines para los que queda habilitado el tratamiento de datos, dado que de conformidad con el principio de limitación de la finalidad (artículo 5.1.b) RGPD) los datos personales serán recogidos para fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. La segunda consiste en hacer notar que el contenido de los formularios de uso voluntario y modelo de representación de uso voluntario regulados en el artículo dos y pendientes de aprobación por la personal titular de la dirección, queda fuera del alcance de este informe.

Seguidamente, el citado primer apartado especifica que el responsable del tratamiento de dichos datos será la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. De modo que, de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva (artículo 5.2 RGPD) corresponderá a esta Dirección aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme a la normativa en materia de protección de datos de conformidad con el artículo 24.1 RGPD.

En cuanto a la obligación de información prevista en el artículo 13 del RGPD y referida en dicho apartado, se llama la atención sobre la necesidad de garantizar el suministro de dicha información con pleno respeto a los términos previstos en el citado precepto, correspondiendo, a modo de mero ejemplo, al responsable del tratamiento facilitar la información que se especifica en el mismo momento en que se obtengan los datos personales relativos al interesado.

En su segundo apartado la citada disposición refiere que la base de legitimación de estos tratamientos resulta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, haciéndose notar, a este respecto, la conveniencia de precisar los preceptos legales que recogen esta atribución de competencias en cuya virtud se legitiman los tratamientos de datos personales que van a realizarse al quedar amparados por las bases jurídicas reguladas en el artículo 6.1. c) y e) del RGPD.

En su apartado tercero y cuarto la citada disposición establece respectivamente que las categorías de destinatarios a quienes se comunicarán los datos serán las *Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias*; y que las categorías de interesados serán los obligados tributarios a los que se refiere el apartado 1.

Pasando al análisis del apartado quinto de la disposición adicional que estamos examinando, su tenor literal es el que sigue: “*Respecto a las categorías de datos personales, se realizará el tratamiento sobre datos de carácter identificativo y datos de carácter tributario exigidos por la normativa vigente y aportados por el propio consultante para la tramitación de los*

*procedimientos a que se refiere el apartado 1, conforme con el principio de proporcionalidad”.*

Como es bien sabido, los principios que todo tratamiento de datos debe respetar como *conditio sine qua non* para ser válido, y sin perjuicio de la necesaria concurrencia de algunas de las bases de legitimación previstas en el artículo 6 RGPD, son los que regula en artículo 5 RGPD y que pasamos a enumerar: principio de licitud, lealtad y transparencia, principio de limitación de la finalidad, principio de minimización de datos, principio de exactitud, principio de limitación del plazo de conservación, principio de integridad y confidencialidad, y principio de responsabilidad proactiva.

Debiéndose distinguir en este punto entre los principios generales de todo tratamiento de datos, y los principios que son exigibles a las leyes legitimadoras de tales tratamientos, a propósito de las cuales se requiere que, en efecto, dichas leyes respeten, en todo caso, el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero: *“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), si además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”.*

En la medida en que la citada disposición está regulando el modo en que habrán de llevarse a cabo tales tratamientos, pero no habilitando supuestos en los que dichos tratamientos podrían realizarse, algo que de ninguna manera sería posible por estar reservada dicha posibilidad a su regulación por norma legal, se recomienda revisar el tenor literal del apartado quinto a fin de adecuarlo al necesario respeto de los principios del artículo 5 RGPD, con mención especial del principio de minimización de datos, en cuya virtud únicamente podrán recogerse aquellos datos que resulten adecuados,

pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que van a ser tratados.

Finalmente, el apartado sexto de la disposición examinada se refiere a las medidas de seguridad implantadas para la protección de datos con remisión al Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del Ministerio de Hacienda, cuyo examen en todo caso excede de los límites de este informe.

Sin perjuicio de todo ello, se recuerda la existencia de una Guía elaborada desde esta AEPD titulada “Orientaciones para la realización de una evaluación de impacto para la protección de datos en el desarrollo normativo” la cual tiene por finalidad servir de guía para la realización de una evaluación de impacto para la protección de datos (EIPD) en el marco de la elaboración de una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), cuando las iniciativas legislativas de las Administraciones Públicas que sean competencia de la AEPD impliquen un tratamiento de datos personales.